

**GUIA DIDACTICA CIENCIAS POLITICAS****GRADO ONCE****RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES****PERIODO IV**

Para una mejor comprensión de los temas, les sugiero hacer una lectura crítica de los diferentes contenidos de la guía. Los videos cortos serán elementos de apoyo para la comprensión de los temas.

Objetivos

1. Identificar las características que definen la formación de los partidos políticos.
2. Reconocer el contexto histórico de la formación y disolución de los partidos políticos en Colombia.
3. Analizar la influencia recíproca entre partidos políticos y medios de comunicación.
4. Explicar las principales preocupaciones políticas de América Latina al iniciar el siglo XXI.
5. Analizar la relación entre el proceso de democratización de Latinoamérica con la consolidación del modelo neoliberal.
6. Identificar los puntos que conforman la agenda política latinoamericana en la actualidad

PARTIDOS POLÍTICOS**Formas de los partidos políticos****Origen de los partidos políticos en Colombia****Situación de los partidos políticos en Colombia.****AGENDA POLÍTICA LATINOAMERICANA****Democratización en Latinoamérica****América Latina y la globalización.****Agenda política latinoamericana.****PARTIDOS POLÍTICOS****Formas de los partidos políticos**

En términos históricos los partidos políticos tienen una reciente vinculación con la democracia. Un **sistema de partidos políticos** implica la estabilidad en la competencia entre partidos, con raíces más o menos estables en la sociedad, la aceptación de partidos y elecciones como instituciones legítimas para definir quién gobierna, y organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables. Para caracterizar un sistema de partidos se debe tener en cuenta el grado de polarización (la distancia ideológica entre partidos) y la dirección de la competencia. Sobre la base de esto se confirma una tipología de ocho tipos:

- **Unipartidismo puro:** Solo hay un partido que tiene el derecho de gobernar, por lo general sobre la base de la constitución vigente.
- **Unipartidismo hegemónico:** Sistema que permite la existencia de una pluralidad de partidos, pero solo uno se impone largamente sobre el resto debido a nivel organizativo, capacidad económica, inserción social, utilización del aparato estatal, u otros motivos.
- **Unipartidismo predominante:** Sistema en el que un partido tiene una influencia superior a la de otros partidos y/o gana por mayoría absoluta en 4 o 5 legislaturas.
- **Democracia sin partidos:** Forma de gobierno en la cual se celebran elecciones periódicas sin la participación de partidos políticos, siendo todos los postulantes candidatos independientes.



- **Bipartidismo:** Dos partidos políticos de ideologías opuestas absorben la mayoría abrumadora de los votos, dejando espacio escaso a otros partidos.
- **Pluripartidismo:** Gran cantidad de partidos políticos tienen amplias posibilidades de obtener el poder ejecutivo
- **Pluripartidismo polipartidista:** Varios partidos políticos se reparten los escaños, estando obligados a realizar coaliciones u otras formas de alianzas para alcanzar el poder.
- **Pluripartidismo de centro:** Entre varios partidos políticos hay uno de centro que obtiene la mayoría de los votos, pero que generalmente ha de realizar coaliciones con el resto de partidos que adquieren más o menos votos según las tendencias del momento.

Según algunos autores, la gobernabilidad democrática se facilita en los sistemas de partidos institucionalizados, que no estén polarizados o fragmentados, pero no son requisitos indispensables para la gobernabilidad.

ACTIVIDAD 1

1. Consultar cuantos partidos políticos hay en Colombia. ¿Cuáles son?
2. Dibujar por lo menos 5 logos de partidos políticos
3. Según el documento, ¿Qué sistema de partidos impera en Colombia?

Origen de los partidos políticos en Colombia

En la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales de Colombia. Primero fue el Liberal en 1848 y cuyo programa fue esbozado por José Ezequiel Rojas. El año siguiente, 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, redactaron el programa correspondiente al Conservador.

A grandes rasgos, la sociedad en esta Colombia decimonónica se dividía en dos grupos que diferían dos cosas, unos abogaban por la tradición política con la que se venía, y en este grupo estaban: Los esclavistas, burócratas, terratenientes, militares de alto rango y clero, para quienes la situación era ideal y debía ser mantenida a toda costa. Parafraseando a Álvaro Tirado Mejía: "tenían mucho que conservar". Los otros, apoyaban la idea de transformar al Estado Colombiano y eran los comerciantes, los indígenas, los esclavos y los artesanos.

Hay una tradición histórica que ha postulado que los orígenes de los partidos Liberal y Conservador se remontan a la herencia de las querellas que existieron entre los bolivarianos y los santanderistas, pero leer un acápite del programa conservador de Mariano Ospina Rodríguez nos desdibuja esta hipótesis porque, en el programa conservador de 1849, Ospina Rodríguez escribió: "Ser o no ser enemigo de Santander, de Azuero o de López, no es ser conservador: porque Santander, Azuero y López, defendieron también, en diferentes épocas, principios conservadores. Haber sido amigo de estos o aquellos caudillos en las guerras por la Independencia, por la libertad o por la Constitución, no constituye a nadie Conservador; porque algunos de estos caudillos han defendido también alguna vez principios conservadores".

Sin embargo, los Conservadores, liderados por Mariano Ospina Rodríguez, preferían continuar con el Estado colonial que se había alargado porque las transformaciones podían interferir con sus intereses económicos: la abolición de la esclavitud, por ejemplo, afectaba los intereses económicos de los esclavistas, porque perderían el dinero que los esclavos les habían costado y se verían obligados a contratar jornaleros. Además, convertir, en términos jurídicos iguales a todos los hombres, les derrumbaba su poder social.

La situación de los liberales era muy diferente. Para ellos, el cambio era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado, pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos. En



Las ideas liberales en Colombia, de Gerardo Molina, se enumeran las reformas que los liberales proponían en la segunda mitad del siglo XIX:

Abolición de la esclavitud

Libertad absoluta de imprenta y de palabra

Libertad religiosa

Libertad de Enseñanza

Libertad de industria y comercio, inclusive el de armas y municiones

Desafuero eclesiástico

Sufragio Universal, directo y secreto

Supresión de la pena de muerte y dulcificación de los castigos

Abolición de la prisión por deuda

Juicio por jurados

Disminución de las funciones del Ejecutivo

Fortalecimiento de las Provincias

Abolición de los monopolios, de los diezmos y de los censos

Libre cambio

Impuesto único y directo

Abolición del ejército

Expulsión de los Jesuitas

Inicios

Las sociedades democráticas y la institucionalización de los partidos políticos en Colombia

Desde 1846 apareció en Bogotá una asociación de la clase de los artesanos, en cuyas instalaciones se dedicaban a dictar clases nocturnas para enseñar a leer, a escribir, para aprender aritmética y dibujo lineal. En 1849, esta sociedad de artesanos comenzó a ser muy popular y comenzaron a frecuentarla personas que deseaban hacer notorias sus opiniones liberales. Poco a poco se acabó con el principio educativo de esta sociedad y comenzó a ser un punto de encuentro para hablar de política y dejaron de asistir las personas que usaban ruana y que eran quienes en un principio recibieron las clases de alfabetismo.

En 1849 se fundó la Sociedad Popular. Se trataba de una sociedad fundada por los jesuitas y se reunían con pretextos religiosos. Desde su inicio fue posible sentir la poca simpatía que sentían por el gobierno y por los liberales, y se convirtió en una asociación conservadora, que luego se llamó Sociedad Católica.

Estas asociaciones se convirtieron en los centros de reunión para personas con pensamientos políticos a fines y cada uno, en cada sede, formó su partido político con sus respectivos simpatizantes.

Tanto liberales como conservadores contaban con adeptos de diferentes clases sociales, pues no todos los conservadores eran esclavistas, burócratas y terratenientes, así como entre los liberales también se contaban personas que veían en el manejo político del pueblo una gran posibilidad de obtener beneficios económicos.

A pesar de existir dos partidos políticos, el pueblo pertenecía a uno u otro más por simpatía o antipatía que por un acto genuino de adhesión ideológica a uno u otro discurso. En Colombia, la pertenencia a un partido siempre fue una cuestión más de tradición familiar que de reflexión individual, lo que hizo que, en nombre de la defensa de dicho partido, el fanatismo imperase por encima del razonamiento sosegado, convirtiendo a las



causas políticas en génesis y motivo fundamentales de la violencia en Colombia durante la primera mitad del siglo XX.

ACTIVIDAD 2

1. Seleccione ocho términos desconocidos en el documento, busque y escriba su significado.
2. Elabore un cuadro, donde clasifique los ideales conservadores y los ideales liberales.

Situación de los partidos políticos en Colombia.

Colombia creó los partidos políticos Liberal y Conservador alrededor del mismo año en el que Duverger dice que estos comenzaron a existir estrictamente como tales (1850), y se dejó mal que bien representar por ellos durante 150 años, aunque sus triunfos hasta 1976 fueron más bélicos que electorales. Muy poca democracia hubo realmente entonces entre grandes periodos de hegemonías en nuestro país desde la Independencia hasta entonces.

Como la izquierda democrática, por diferentes razones, no pudo forzar la justicia social que sí logró en otros países, le correspondió promoverla ocasionalmente en el nuestro al Partido Liberal Colombiano. Pero su éxito no tuvo continuidad por sus divisiones internas, los magnicidios de los que fue víctima, los terribles problemas políticos del país (conflicto armado, narcotráfico y desigualdad estructural), y la crisis mundial de los partidos que la alcanzó en el momento en que ya comenzaba a perfilarse como la opción socialdemócrata que se necesitaba.



Diseño: Ricardo González - UNIMEDIOS



Y justo en 1990, el año en el que ya se estaba concluyendo la democratización del mundo, luego de más dos siglos de esfuerzos costosos, los analistas dijeron que en Colombia estábamos “Al Filo del Caos”, y se generó el movimiento social y político que dio lugar a nuestra actual Constitución.

Se diagnosticó en 1991 que la causa de los problemas en Colombia era el bipartidismo, desconociendo la realidad de que se había tratado de hegemonías monopartidistas o bipartidistas y no de un auténtico bipartidismo al estilo inglés, americano o incluso español (desde 1975 hasta hace muy poco). En ellos uno de dos partidos siempre gana y gobierna, pero por las buenas y sin pactos raros.

Con gran felicidad se creó entonces en Colombia un gran número de partidos políticos, que en el fondo son casi todos, ramas independizadas de los originales Liberal y Conservador, y fue necesario hacer una audaz reforma electoral en 2003 para que se organizaran un poco y se redujera su excesivo número. Pero esta normatividad, aunque logró que la izquierda democrática finalmente emergiera y se volviera opción de gobierno, se quedó corta, porque aún existen muchos partidos compitiendo y están poco institucionalizados. El sistema de partidos que se encuentran en términos de ciencia política no es el pluripartidismo armonioso y moderado que queríamos, sino una amalgama extraña de alianzas temporales con ideologías cambiantes.

La buena noticia en esta confusión es lo que la gente cree que es la mala noticia, la polarización verbal, que tras el Acuerdo de Paz y otros acontecimientos reemplazó al enfrentamiento violento de manera importante, pero con grandes lagunas (el asesinato de líderes sociales entre otras varias). Se han roto amistades, se han separado familias, ha habido persecuciones laborales, pero el panorama se aclaró como nunca se había visto en Colombia, incluso también con las últimas elecciones regionales.

La mala noticia es que realmente estas opciones se diluyen en un maremágnum de alianzas estratégicas, vieja politiquería clientelista, corrupción electoral organizada y muchos otros problemas irresueltos, que hay que seguir intentando combatir a partir de reformas políticas, acuerdos sociales, presión pública y, si tenemos suerte: liderazgos serenos pero audaces de izquierda, centro y derecha.

ACTIVIDAD 3

- 1. Consultar ¿Cuáles son los requisitos legales para conformar un partido político?**
- 2. ¿Cual es el partido político del presidente actual y del expresidente Petro y cuales son ideas, que representa el logo?**

Democratización en Latinoamérica

LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

La observación del Índice de Democracia Electoral (IDE) sugiere que se han producido grandes mejoras desde 1977 hasta hoy en toda la región, y que los progresos más importantes se registraron entre 1977 y 1985.

En la actualidad, en todos los países de la región se reconoce el derecho universal al voto, pese a la permanencia de algunos problemas como el subregistro, las dificultades para la obtención de documentos de



identidad o restricciones de voto a ciudadanos que viven en el extranjero. En la mayoría de las elecciones, desde 1980 no se verificaron irregularidades que influyeran de manera decisiva en el resultado, con excepción de República Dominicana en 1994 y Perú en 2000. Se han hecho relevantes progresos en la posibilidad de presentarse como candidatos y de expresar la propia preferencia electoral: el Estado ha mejorado su capacidad para garantizar la integridad física de los candidatos (con excepción de Colombia). También la efectiva ocupación de los cargos públicos por los candidatos ganadores ha aumentado, lo mismo que su permanencia durante los plazos establecidos. Además, a pesar de las caídas de gobernantes como producto de la movilización social, estas crisis casi nunca se han resuelto con intervención militar (ni siquiera en momentos de crisis como en Bolivia y Ecuador), lo que ha terminado con la secuela de golpes de Estado que caracterizaron el pasado reciente de América Latina. Sin embargo, el golpe de estado de Honduras de junio de 2009 constituye un inesperado paso atrás para las democracias centroamericanas.

Es probable que la disminución en los cambios violentos de gobierno sea resultado del rechazo de las experiencias de dictaduras sangrientas y corruptas. Por eso podemos decir que, aunque la población siente un cierto malestar hacia el funcionamiento de la democracia, no la cuestiona como mejor forma de gobierno. Sin embargo, como veremos más adelante, la pobreza y la falta de bienestar ponen en riesgo esta postura en el largo plazo.

Una ciudadanía integral

La democracia se sustancia en la extensión de la igualdad jurídica a toda la ciudadanía; frente a un régimen autocrático, un régimen democrático convierte a los súbditos en ciudadanos si sus derechos fundamentales son reconocidos. Sin embargo, una verdadera democracia no sólo reconoce, sino que además garantiza, extiende y protege esos derechos.

En los países latinoamericanos, la incorporación de los principios universales de derechos humanos a través de la aprobación de la mayoría de los tratados internacionales, ha sido satisfactoria. Sin embargo, la puesta en práctica de los postulados teóricos de derechos humanos ha encontrado una multitud de dificultades desde las dictaduras militares americanas de los sesenta y setenta, a la crisis económica iniciada en los ochenta.

Se ha creado un panorama de grandes brechas entre los derechos políticos y los sociales y civiles: en la realidad actual los derechos humanos siguen siendo para amplios sectores de la población simples enunciados que no se traducen en una mejor calidad de vida. Dada la articulación indivisible que existe entre los diferentes derechos humanos y la democracia y el desarrollo es posible afirmar que no se logran avances relevantes en los derechos sociales, económicos y civiles. Los derechos políticos, tan difícilmente alcanzados en muchos países latinoamericanos, tienden a perder sentido; además, esas carencias impiden hablar de verdadera democracia y de desarrollo humano.

No obstante, los logros con respecto de la democracia electoral, la ciudadanía política sufre problemas relacionados con la participación y la representación. La participación es irregular y existen barreras para el ingreso de nuevos actores a la competencia electoral. Hay grupos sociales (en particular indígenas, afrodescendientes y mujeres) que tienen poca representación en el Parlamento. Además, la crisis de los partidos políticos dificulta la canalización de demandas ciudadanas, la representación de intereses diferentes y la educación de la ciudadanía.

Por otra parte, los importantes pasos dados en materia legislativa para la tutela de los derechos civiles, no se corresponden con la capacidad de los Estados de garantizarlos en la práctica. En América Latina, a pesar de la firma de los tratados internacionales y el reconocimiento de los derechos fundamentales en la legislación nacional, la aplicación efectiva aún se enfrenta con las actuaciones de grupos armados ilegales, y los organismos oficiales de seguridad a veces quedan fuera del control de los gobernantes electos.



La violencia ordinaria es alta, como muestra la elevada frecuencia de homicidios y actos de violencia contra las mujeres. Aunque todos los países hayan elaborado leyes contra la violencia familiar, el problema todavía es grave en la práctica cotidiana, sobre todo en entornos caracterizados por altos niveles de pobreza y bajos niveles de educación.

El ejercicio de los derechos de ciudadanía (en el ámbito del acceso a la justicia y de la posibilidad de obtener un proceso justo) está condicionado por el origen y condición social de la persona. Los grupos clasificados en las categorías más débiles en todos los países de la región, además de las mujeres, son los pobres, los inmigrantes y los indígenas. Ese panorama se completa con la subsistencia de carencias esenciales en la libertad de prensa y de la información, que permiten el abuso de poder a través de la manipulación discrecional de la información contra algunos sujetos.

El déficit social

El concepto de ciudadanía social incluye tanto la dimensión de las necesidades básicas como la de la integración social. La primera se refiere a los niveles de educación y salud y a la intervención estatal en el abastecimiento de los servicios básicos relativos, la segunda a los niveles de pobreza, desigualdad y desempleo.

Aunque se hayan producido logros importantes en toda la región, la situación es aún grave. La mortalidad infantil es alta (33 niños muertos de cada 1000 nacidos vivos); la desnutrición afecta a 19% de los niños; la esperanza de vida aún no alcanza los 70 años. El gasto público medio en salud es de 3.3% del PIB. Aspectos fundamentales para asegurar ese derecho, como el acceso a cantidades suficientes de agua potable y a instalaciones sanitarias para la eliminación de excrementos humanos, todavía no están disponibles para toda la población.

En cuanto a la educación, destacan los progresos en el gasto público, que se ha duplicado entre 1980 y 2000, desde 3.1% hasta 6.3%. Sin embargo, los mayores progresos afectan a la extensión de la escolarización primaria, lo que es un óptimo punto de partida, pero no suficiente para crear un capital humano capaz de incrementar de manera duradera y decisiva el desarrollo de la región.

La falta de integridad social constituye un problema aún más grave en la región. Los elevados niveles de pobreza, desigualdad y falta de empleo protegido y de calidad representan las mayores deficiencias de las democracias latinoamericanas. La falta de bienestar económico y de equidad social constituye una fuente de inestabilidad y fragmentación social, de frustración de las reformas económicas y de los progresos constitucionales y legislativos.

En general, la evolución de los indicadores socio-económicos ha cambiado al principio del nuevo siglo. La pobreza de la región ha crecido entre 1980 y 2002 y luego ha bajado entre 2003 y 2007, como consecuencia del ciclo económico favorable y del aumento del gasto social en estos años. Aunque los niveles de pobreza sean chocantes, lo que destaca más son los enormes niveles de desigualdad: América Latina es la región que registra las mayores desigualdades del mundo en la distribución de recursos y de poder.

Por otra parte, el desempleo ha aumentado en toda la región entre 1990 y 2002. En los últimos años, se han producido algunas mejoras, pues la tasa de desempleo ha bajado, recolocándose a 8.6% en 2006 (CEPAL, 2008). Sin embargo, la situación no ha mejorado lo suficiente en relación con la protección laboral, con el trabajo informal (44.9% en 2006), con la escasa calidad del trabajo y con la discriminación respecto de los grupos más desfavorecidos. La falta de empleo de calidad y de protección laboral y las discriminaciones laborales son factores que inciden muchísimo en las desigualdades sociales.

El empleo femenino y juvenil se concentra en el sector informal o en sectores de baja productividad y rentabilidad. Pese a que se ha registrado una mejora paulatina, en diversos indicadores, los jóvenes y las



mujeres tienen una posición abiertamente discriminada en el mercado del trabajo, lo que se manifiesta en la disparidad de los ingresos entre sexos y franjas de edad, en las tasas actuales de desempleo femenino (9.4%) y juvenil (12.9%) que han empeorado desde 1990, y en la deficiencia de la protección laboral.

DESIGUALDAD: UN MONSTRUO CON MÚLTIPLES ROSTROS

La desigualdad no sólo es un problema por sí misma, sino que también aumenta sus efectos negativos porque interactúa con otros fenómenos. Los altos niveles de desigualdad agudizan la pobreza y reducen la calidad de vida de la población. Además, afectan la cohesión social, porque en unión con la corrupción y la violencia reducen la calidad institucional y aumentan la conflictividad social.

La trampa de la desigualdad

A causa de la combinación de pobreza y desigualdad, la miseria en América Latina adquiere una forma particular. El nivel de vida es inferior al que cabría esperar según el nivel de ingreso nacional. La miseria que afecta a grandes sectores de la población no proviene solamente de la pobreza, sino que es básicamente una consecuencia de la distribución asimétrica de la riqueza. Si el nivel de desigualdad fuera igual al de países con similares niveles de desarrollo, la tasa de pobreza se reduciría a la mitad. Esta situación reduce el impacto que el crecimiento económico podría tener sobre el combate a la pobreza; en cambio, existe una probabilidad alta de que ese crecimiento conduzca a mayores niveles de concentración de la riqueza en las manos de las élites, sin mejorar la situación de los pobres. Por tanto, no se pueden reducir sustancialmente los niveles de pobreza si no hay cambios en la distribución de la riqueza.

El conjunto de desigualdad y pobreza configura una situación muy compleja que pone en serio peligro la estabilidad de la democracia en la región, ya que los derechos políticos no se acompañan de la efectiva extensión de los derechos civiles y sociales. En primer lugar, se configura un contraste muy fuerte entre economía y democracia. No es posible construir una democracia sólida sin asegurar bases económicas con niveles reducidos de pobreza y desigualdad. Los altos niveles de pobreza y desigualdad impiden la cohesión social y reducen el apoyo a la democracia por la población, que no percibe en absoluto la capacidad del gobierno de responder a sus demandas sociales. En esta situación no se puede excluir que, a largo plazo, la población apoye un régimen autoritario si éste pudiera dar respuesta a sus demandas de bienestar.

La relación entre desigualdad y violencia

El tema de la conflictividad en América Latina adquiere particular importancia, ya que la mayoría de los países cuenta con experiencias de regímenes autoritarios. En la evolución hacia la democracia se han dado varios momentos de tensión institucional y de elevado conflicto social que a menudo han desembocado en la caída del poder de varios presidentes.

La presencia endémica de la violencia es un problema de gran relevancia para América Latina. La región tiene una tasa de homicidios de 26 casos por cada 100 mil habitantes, lo que triplica la media europea (8.9), y se aleja mucho de la tasa mundial (8.8). Además, a diferencia de lo que ocurre en Europa, en América Latina los crímenes van en aumento. La violencia en América Latina y el Caribe es una de las preocupaciones ciudadanas prioritarias para la calidad de vida de todos los sectores sociales. Colombia, Venezuela, Guatemala y El Salvador se ubican entre los países con la mayor tasa de homicidios en el mundo.

Además del sufrimiento social, la violencia trae consigo elevados costos sociales que a menudo sobrepasan el gasto social. La violencia en América Latina ha adquirido una dimensión peculiar, conectándose con la situación de desigualdad difundida en la región y el ejercicio del poder por las minorías privilegiadas.

La visión clásica de la violencia, según la economía política del desarrollo, es su consideración como elemento favorable para las actividades productivas a través del monopolio de la fuerza por el Estado. En



América Latina, ese monopolio no ha sido asociado con mejores condiciones para el crecimiento. Al contrario, la violencia ha sido la modalidad de reproducción de las élites económicas porque la dependencia de los estados latinoamericanos de la ayuda financiera internacional hizo que la legitimación del poder del Estado no se fundara sobre el consenso colectivo. En ese contexto, la violencia ha permanecido como instrumento de perpetuación de las desigualdades por parte de los grupos criminales o por los militares que actúan por cuenta de las élites de poder.

La relación entre desigualdad y corrupción

De acuerdo con el Informe de Transparencia Internacional, América Latina es una región muy afectada por la corrupción: su nivel medio (3.6) es el peor respecto de las demás regiones del mundo, con excepción de África (2.9) y las economías de transición de Europa Oriental (3.0). Los países más corruptos según dicho informe son Haití, Venezuela, Ecuador y Paraguay.

La perspectiva de los estudiosos de Ciencias Políticas y Económicas sobre la corrupción se ha ido transformando de manera relevante a lo largo del tiempo. Hasta mediados de los años ochenta, prevalecía la opinión de que la corrupción podía ser un factor positivo para la eficiencia económica y el crecimiento económico. A partir de los años noventa, la mayoría de los estudios sobre el tema empezaron a considerar la corrupción como una amenaza para los procesos de crecimiento económico y de desarrollo, las inversiones extranjeras, el libre comercio. En particular, se demostró que la corrupción incrementa la pobreza y reduce el crecimiento económico.

Además, la corrupción afecta la distribución de los recursos públicos: por un lado, impacta sobre las finanzas públicas y aumenta la regresividad del sistema fiscal; por otro lado, desvía el gasto público desde la maximización del bienestar social hacia inversiones de capital improductivas que permiten extraer mayores sobornos. En particular, la corrupción está relacionada con un mayor gasto militar y menores gastos sociales en servicios básicos como educación y salud.

Por un lado, corrupción y desigualdad se refuerzan mutuamente creando un círculo vicioso; en este sentido, la corrupción "cumple con su deber" en cuanto instrumento de las élites para manipular las instituciones a favor de sus intereses y de la consolidación de su poder, lo que incentiva y aumenta las oportunidades de recurrir a actos de corrupción para perpetuar esta situación de privilegio. Este mecanismo explica la persistencia de ambos fenómenos, corrupción y desigualdad. Por otro lado, la desigualdad tiene un papel fundamental en ese círculo, ya que, a través de la corrupción, se produce una reducción del tamaño del Estado y de la calidad de la política y de las instituciones, lo que provoca el desvío de las políticas de bienestar colectivo hacia intereses particulares, disminuyendo los gastos sociales y aumentando la regresividad del sistema fiscal.

Así que podemos concluir que la corrupción en unión con la desigualdad constituye un factor de debilitación del Estado, de la calidad institucional y de la cohesión social, y todos estos elementos a su vez amenazan el desarrollo democrático. El papel fundamental que juega la desigualdad reconduce la atención sobre el papel del Estado en el diseño y ejecución de políticas adecuadas para reducir la brecha entre pobres y ricos, y para aumentar la cohesión social y la participación popular; reconduce la atención, finalmente, sobre los mecanismos de buen gobierno en las instituciones públicas y privadas y sobre la responsabilidad colectiva en la creación de un entorno desfavorable para la corrupción.

En los últimos treinta años, América Latina ha experimentado la transición y la consolidación democrática. Podemos considerar eso como un gran avance para la región, en el sentido de que la democracia es la forma más idónea para asegurar el desarrollo humano, el aumento de oportunidad de elección de las personas, así como el respeto y la inclusión de las diversidades que cada sociedad presenta. Sin embargo, las democracias



de América Latina no satisfacen los requisitos fundamentales para que sean democracias integrales, es decir capaces de garantizar realmente los derechos políticos, civiles y sociales de la ciudadanía.

Son sobre todo las debilidades sociales las que ponen en serio peligro los avances democráticos de la región, y, en particular, la desigualdad es el factor que está en el origen de las deficiencias de los estados latinoamericanos, incide en los altos niveles de pobreza, aumenta la conflictividad social, mina la seguridad pública y debilita la calidad institucional.

La desigualdad aunada a la pobreza ocasiona una gran vulnerabilidad en relación con la situación internacional. Los efectos de la crisis global actual en un contexto de profundo déficit social ponen en riesgo los avances económicos y sociales de las últimas dos décadas. Esa situación hace peligrar el desarrollo democrático de la región, ya que la falta de equidad impide la sostenibilidad del desarrollo. Un bienestar no repartido entre la población no representa el progreso del conjunto de la ciudadanía, sino sólo el enriquecimiento de una élite a costa de la mayoría.

La desigualdad está también en las raíces de la debilidad institucional y democrática de los estados latinoamericanos. La falta de equidad económica y social se vincula con fenómenos, como corrupción y violencia, que contribuyen a la perpetuación del poder por los poderes fácticos y por las élites privilegiadas y a la exclusión de los demás ciudadanos del bienestar económico y de la toma de decisiones.

La corrupción aunada a la desigualdad tiene una relevancia central en el desmoronamiento de la percepción colectiva hacia la democracia, pues reduce la calidad democrática del Estado, la eficacia y la credibilidad de sus instituciones. Un Estado corrupto es un Estado débil y enfermo, por lo tanto incapaz de garantizar reglas igualitarias que permitan la participación equitativa de toda la ciudadanía y de responder adecuadamente a las demandas públicas. Es un Estado ineficaz y, sobre todo, pierde legitimidad a los ojos de sus ciudadanos.

Es necesario construir un pacto fiscal que favorezca la redistribución de la riqueza y que asegure recursos económicos estables y suficientes para implementar las políticas sociales. Esas políticas tienen que respetar el principio de universalidad y ser diseñadas e implementadas con el objetivo de que un mayor número de personas puedan acceder a sistemas educativos y sanitarios de calidad, a políticas laborales que potencien el empleo digno y la protección socio-laboral, con especial atención a las categorías más débiles. Sólo a través de políticas económicas y sociales orientadas hacia la equidad y el fomento del tejido asociativo y representativo pueden aumentar la cohesión social y las oportunidades reales para que la ciudadanía participe en la democracia y en el poder. Sólo una acción constante y sólida de fortalecimiento institucional y de reconstrucción del Estado puede extender la democracia entre la población y aumentar la percepción de que esa democracia tiene un contenido real, una calidad diferencial y ventajas estables. Sólo desde aquí puede empezar el círculo virtuoso entre democracia, desarrollo humano sostenible y ciudadanía integral e integrada en el Estado.

ACTIVIDAD 4

- 1. Elabore un mapa conceptual del documento**
- 2. Analizando los problemas expuestos en el documento, ¿Qué posibles soluciones plantea el gobierno actual para cada uno de ellos (pobreza, corrupción, desigualdad, violencia)**

América Latina y la globalización.

Vista desde ciertas partes de América Latina, la globalización aparece como una imposición de los países más ricos a los más pobres con el único fin de esquilmarlos. A esto se añade la idea, sumamente extendida en algunos medios y entre ciertos intelectuales, de que hay una única globalización, que esta es unidireccional



y está impuesta desde arriba, especialmente por las empresas monopólicas transnacionales. Desde esta perspectiva, la globalización se expresa básicamente a partir de las relaciones con Estados Unidos y Europa y con los organismos financieros multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a la cabeza. Esta lectura es, en cierto modo, consecuencia de la fuerte impronta nacionalista existente en las mentalidades latinoamericanas y del peso que todavía sigue teniendo en ellas la idea del imperialismo o del «imperio», como se lo llama ahora. Un imperio que mantiene el apellido «yanqui» y que, de la mano de algunos líderes populistas, sigue agitando viejos fantasmas.

Es que, a la hora de analizar los efectos de la globalización, predomina la vieja costumbre latinoamericana de mirarse profunda e introspectivamente el ombligo. Así, solo cuentan los efectos derramados sobre los propios países, sobre la realidad más inmediata, y la consideración de los aspectos negativos. Desde esta perspectiva, la globalización es la causante directa de las crisis financieras y los shocks externos y la responsable de buena parte de las plagas que se han abatido –y aún se abaten– sobre la región. Por el contrario, a la hora de valorar el empuje alcista en los precios de las materias primas, propiciado por cinco años de crecimiento económico ininterrumpido en todos los países latinoamericanos, el acento se pone en el empuje de la demanda de China y la India, y no en la globalización. Poco o nada se dice acerca de los motores del crecimiento asiático –la apertura económica, la inversión en tecnología, el cierre de la brecha digital–, que son en buena medida resultado de la globalización, que también ha contribuido a la impresionante reducción de la pobreza en Asia Oriental, más allá del debate académico acerca de los métodos estadísticos utilizados.

Hay en los estilos y los ritmos de crecimiento una cuestión de fondo: la actitud frente al capital extranjero y a la inversión extranjera directa (IED). Algunos países latinoamericanos son bastante refractarios al papel que debe, o puede, jugar la IED en el crecimiento económico. Esta postura no es patrimonio de la izquierda latinoamericana. Una parte de la derecha, envuelta en un fuerte nacionalismo, se expresa de la misma manera. En la izquierda, la principal excepción frente a tanta cerrazón son los socialistas chilenos, cuyo discurso demuestra que han captado la importancia que los flujos externos de capital tienen a la hora de crear empresas y empleos. Es que, como no se cansa de repetir el ex-presidente del gobierno español, Felipe González, para repartir riqueza primero hay que crearla.

Los números son elocuentes. Según el BM, mientras China captó casi 30% de la inversión internacional privada recibida por todos los países en desarrollo en 2003, América Latina obtuvo mucho menos: Brasil, el principal receptor de IED de la región, atrajo 6,73%, seguido por México, con 4,78%. Los demás países obtuvieron porcentajes aún menores. A fines de la década de 1980, cuando la compañía Disney decidió abrir un parque temático en Europa, se desató una dura puja entre distintos países para atraer la inversión: venta de tierras a precios preferenciales, ventajas fiscales, facilidades de inversión, garantías jurídicas, etc. Finalmente, el proyecto se instaló en Francia y en 1992 se inauguró Disneyland París. Si la misma empresa de capital estadounidense hubiera planteado un proyecto similar en América Latina, las muestras de repulsa



habrían sido constantes, en la estela de Armand Mattelart y Ariel Dorfman, quienes, en Para leer al Pato Donald. Comunicación de masas y colonialismo, publicado en 1972, denunciaban la ideología imperialista subyacente en los personajes de Disney y señalaban que, detrás de su rostro amable, se escondía la propaganda más cruda del imperialismo cultural. Estos temas, en lugar de las ventajas económicas de la inversión y la creación de puestos de trabajo, habrían prevalecido en la discusión en la mayor parte de América Latina.

Otra forma de mirar el tema es comparar la capacidad para enfrentar la pobreza. A lo largo de la última década, Asia –con la excepción de Asia Central– fue la región del mundo que logró reducir la pobreza de manera más significativa, de acuerdo con el BM. En números absolutos, China, Pakistán y la India fueron los países que lograron que más personas salieran de la pobreza. China redujo el número de pobres en 167 millones entre 1990 y 2001, de 33% a menos de 17% (en 2007 la cifra se situaba en torno de 10%). En términos porcentuales, los resultados más impactantes los obtuvo Vietnam, donde el porcentaje de la población por debajo de la línea de extrema pobreza pasó de 14,6% a 2% en una década.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), América Latina redujo la pobreza de 48,3% a 35,1%, mientras que la pobreza extrema cayó de 22,5% a 9,1%. La reducción de la pobreza y de la extrema pobreza en América Latina no ha sido uniforme. Entre 1990 y 2006, los países en los que más se redujeron, en términos porcentuales, fueron Chile, Brasil y México, seguidos por Perú y, a mayor distancia, Venezuela, Panamá, El Salvador y Colombia. Chile es, por lejos, el país con un desempeño más claro y contundente en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza.

El crecimiento económico reciente ha tenido mucho impacto en este proceso de reducción de los índices de pobreza, aunque ha sido inferior al registrado en otras regiones del planeta. Si América Latina ha crecido en los últimos cinco años a tasas importantes, solo equiparables a las de las décadas de 1960 y 1970 o a la edad dorada de las exportaciones del siglo XIX, su performance ha sido menos exitosa que la de la mayor parte de sus rivales del mundo en desarrollo. En suma, América Latina crece, pero mucho menos que el resto de sus competidores. La respuesta a este desfase no se encuentra en la macroeconomía, donde por lo general todos los países de la región hacen buena letra, sino en la micro, en la creciente intervención del Estado, la falta de seguridad jurídica y las deficientes estructuras fiscales o impositivas.

Razones y sinrazones

En buena parte de América Latina se sigue esperando la llegada del Mesías, de ese caudillo liberador que acabe mágicamente con todos los males nacionales. Solo esto explica las amplias mayorías con las que Evo Morales o Rafael Correa llegaron al poder. Las esperanzas, prácticamente todas las esperanzas de los pueblos, puestas en una persona. El problema es que el peso de la esperanza –y, de algún modo, también el peso de la utopía– descansa en líderes populistas en lugar de apoyarse en las instituciones. En América



Latina hay una tendencia secular, casi compulsiva, a reinventar la rueda de forma recurrente, como lo prueban las constantes reformas constitucionales, realizadas prácticamente desde el inicio republicano, así como la práctica de hacer tabla rasa con el pasado, lo que impide acumular capital físico, capital social y capital humano, y más aún construir instituciones sólidas y estables. Por eso resulta natural que América Latina no logre aprovechar el tren de la globalización, siendo, como es, incapaz de atrapar su propio destino.

Pero generalizar sobre América Latina es muy difícil. La opinión pública de cada país no se expresa de la misma manera sobre la globalización ni tiene la misma imagen, por ejemplo, de EEUU. Mientras, en promedio, la visión sobre EEUU es medianamente positiva según Latinobarómetro, las diferencias nacionales son importantes. Los dominicanos (93%) y los panameños (90%) tienen el mejor concepto de EEUU, mientras que entre los venezolanos (30%) y los argentinos (20%) prevalece una mirada negativa. Brasil (54%) y México (50%), los dos países más poblados del continente, están en una zona templada.

Simultáneamente a las diferencias entre la opinión pública de un país y de otro, las posiciones de los líderes latinoamericanos sobre la globalización también son variadas y se corresponden con su opción política. Los dirigentes chilenos, que han apostado de forma sistemática por una clara apertura económica y por la firma de tratados de libre comercio (TLC), son partidarios de sacar el mayor provecho posible de la actual coyuntura internacional. El presidente de Brasil, tiene una postura más matizada. Según su punto de vista, la supuesta racionalidad de la globalización no satisface los intereses de la mayoría, por lo que es necesario globalizar los valores de la democracia, la justicia social y el desarrollo.

Pero otros líderes, que apuestan por soluciones endógenas antes que por la apertura al mundo, y que incluso reniegan de los beneficios del comercio, rechazan de manera más tajante la globalización. Fidel Castro destaca por su contundencia, ya que la globalización neoliberal equivale a «lo peor del capitalismo salvaje». Así identifica negativamente tres elementos: el capitalismo depredador, el neoliberalismo culpable de todos los males de América Latina y la globalización, síntesis de todo lo anterior. El gobierno venezolano, con una clara vocación de liderazgo continental, se alinea con Cuba. Durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), celebrada en diciembre de 2006 en Cochabamba, Bolivia, el presidente Hugo Chávez señaló: «La globalización es un desastre. Allí está el imperio norteamericano hundiéndose, lo que más crece en Estados Unidos es la pobreza. La globalización es cosa del pasado, enfrentemos una nueva era: el mundo pluripolar».

Pero una cosa es predicar sobre las virtudes de la empresa vernácula y otra muy distinta fomentarla. En el mundo actual, caracterizado por la competencia, no es con subsidios o renacionalizaciones de empresas privatizadas como se avanza en ese camino. Para ello es necesaria una fuerte inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica y un gran impulso a la educación, procesos en los cuales América Latina está muy rezagada.



En realidad, la integración latinoamericana es tan antigua como la europea. Ambas datan de la década de 1950, aunque con resultados radicalmente diferentes. ¿Fracasó una y triunfó la otra solo por la oposición de EEUU? Algo similar se puede decir de la dispar evolución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ambos hijos de la posguerra mundial. Mientras que los europeos pudieron reducir su gasto de defensa gracias al apoyo estadounidense y financiar con ese dinero la construcción del Estado de Bienestar, el temor a la presencia de EEUU imposibilitó a los países de la región sacar todo el provecho que hubieran podido de la alianza con Washington.

ACTIVIDAD 5

1. **Elabore una tira cómica sobre la globalización en América Latina**
2. **Elabore un ensayo, donde sienta una posición personal sobre la globalización en América**

Agenda política latinoamericana.

Áreas de políticas

1.- Infraestructura digital

La infraestructura digital es el elemento habilitador de los procesos de transformación digital. Es por este motivo que es crítico impulsar políticas y agendas que busquen mejorar las condiciones de acceso a la banda ancha en condiciones de asequibilidad y de calidad en todos los ámbitos geográficos y en los distintos segmentos socioeconómicos.

2.- Transformación digital y economía digital

Las tecnologías digitales están impactando todas actividades económicas transformando procesos, modelos de negocios, productos y cadenas de valor. Para potenciar el impacto de estas tecnologías en la economía, se requiere impulsar su adopción en el tejido productivo, con foco en las pequeñas y medianas empresas y promover el emprendimiento de base tecnológica y la innovación.

3.- Gobierno digital

Las tecnologías digitales ofrecen diversas oportunidades para mejorar la provisión de servicios de gobierno, incrementar la transparencia, facilitar canales de comunicación con la ciudadanía e impulsar la innovación pública. Con este objetivo los gobiernos deben adoptar estrategias de transformación digital a nivel de gobierno, mediante la definición de normas de interoperabilidad y el diseño de sistemas integrados que favorezcan estos cambios.

4.- Inclusión, competencias y habilidades digitales

El desarrollo de competencias y habilidades digitales son clave para promover los procesos de transformación digital en las organizaciones y las empresas. Esto requiere de una capacitación continua de trabajadores en los ámbitos técnicos y profesionales, pero también de un sistema educativo de calidad que otorgue los conocimientos básicos necesarios para el desarrollo del capital humano.

5.- Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible

Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y las redes 5G, se están convirtiendo en un recurso cada vez más importante para impulsar nuevas industrias, procesos y productos.



Las economías que estén mejor posicionadas para aprovechar este contexto y la nueva revolución industrial podrán impulsar su productividad, crecimiento y empleo.

6.- Confianza y seguridad digital

Los crecientes incidentes en materia de ciberseguridad a nivel global están evidenciando las vulnerabilidades existentes en el ámbito digital. La seguridad es un elemento central para mantener la confianza en las tecnologías digitales. Si bien existe un consenso amplio sobre el panorama de las amenazas en ciberseguridad, atender estos desafíos es un tema complejo que requiere de acciones en diversos ámbitos y esfuerzos de cooperación a nivel local e internacional.

7.- Mercado digital regional

Las tecnologías digitales ofrecen diversas oportunidades para fortalecer el intercambio comercial con base en las similitudes lingüísticas y culturales de la región. Fomentar una estrategia de mercado digital regional, que reduzca las barreras comercio digital, debe ser parte de la estrategia de los mecanismos de integración subregional, mediante una mayor integración de la infraestructura digital, la armonización normativa, el libre flujo de datos, la facilitación del comercio y la mejora de los servicios de logística, entre otros.

8.- Cooperación regional digital

El carácter transfronterizo de las tecnologías digitales y los desafíos en diversos ámbitos requieren promover una cooperación regional digital fortalecida para apoyar los procesos de gobernanza de Internet, mejorando los mecanismos de diálogo nacionales, regionales y subregionales, con la participación de actores del ámbito público y privado.

9.-Enfrentar la pandemia y facilitar la recuperación y reactivación económica

La pandemia del COVID-19 produjo una crisis económica y social sin precedentes. Las tecnologías digitales han sido instrumentos esenciales para enfrentar la pandemia y mejorar la resiliencia de la economía. Estas tecnologías también pueden ser claves para la reactivación económica y transformación digital productiva.

ACTIVIDAD 6

- 1. Elabore una revista con los puntos anteriores. con imágenes, comentarios, tips,**